

Medina Piña, Nilsa. **Movimientos sociales: nuevas formas de liderazgo comunitario / Nilsa Medina Piña.**
En: OSAL : Observatorio Social de América Latina. Año 8 no. 23 (abr .2008-). Buenos Aires : CLACSO, 2008- . -- ISSN 1515-3282

Disponible en:<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal23/12S1MediPin.pdf>

Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la Red CLACSO
<http://www.clacso.org.ar/biblioteca>
biblioteca@clacso.edu.ar

Movimientos sociales: nuevas formas de liderazgo comunitario

Nilsa Medina Piña

Profesora de la Facultad de Estudios Generales de
la Universidad de Puerto Rico.

Resumen

El texto analiza la construcción de los movimientos sociales en Puerto Rico y la creación de liderazgos comunitarios y plantea algunas reformas económicas.

Abstract

The text discusses the construction of social movements in Puerto Rico, the creation of community leaders and suggests some economic reforms.

Palabras clave

Descolonización; Nuevos Movimientos Sociales; Democracia; Liderazgo Comunitario; Autogestión.

Keywords

decolonization; new social movements; democracy; comunitary Leaderships; selfadministration.

Cómo citar este artículo

Medina Piña, Nilsa 2008 "Movimientos sociales: nuevas formas de liderazgo comunitario" en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, N° 23, abril.

El problema de la construcción de los movimientos sociales como objeto de estudio nos introduce a nuevos retos de producción teórico-conceptual para analizar una amplia gama de prácticas sociales, con manifestaciones muy diversas en la vida económica, política y cultural puertorriqueña. Partimos de una perspectiva metodológica que privilegia el análisis de las experiencias y procesos frente a los esquemas preconcebidos de interpretación social. Ello nos remite a la identificación de los sujetos que protagonizan el movimiento social, a la explicitación del conjunto de demandas sociales y las condiciones que las provocan, lo que necesariamente nos conduce a rescatar su trama histórica.

En ese andamiaje histórico se albergan los asuntos referidos a la identidad nacional puertorriqueña, en tanto el proceso de formación nacional en Puerto Rico quedó trunco por el colonialismo, primero de España y luego de los Estados Unidos. A pesar de no haber logrado la constitución formal y legal de su Estado-nación, los puertorriqueños han constituido de facto una nación con identidad, cultura e instituciones propias. Al igual que otras naciones caribeñas, los poderes coloniales estructuran la dominación económica y social mediante la importación de mano de obra esclava y el establecimiento de una economía de plantación basada en la producción azucarera. Su capacidad de resistir creativamente, con fuerza de pueblo, se encuentra hoy en una encrucijada crítica, y el país ha comenzado a cruzar el umbral de la ingobernabilidad y, sin duda, a mostrar la inviabilidad de su relación actual con los Estados Unidos. Puerto Rico es una sociedad que recorrió el camino de la indigencia y las carencias básicas hasta niveles inimaginables de consumismo capitalista. En los años cincuenta, con grandes inversiones de capital privado se logró el llamado “milagro de Puerto Rico” mediante el programa Manos a la Obra llamado de puertorricanización, plan que fue presentado como una vitrina de la democracia, una alternativa que le serviría a los Estados Unidos como un modelo de expansión del ámbito de su influencia en el Caribe y el resto del mundo.

Las bases de este modelo están en las políticas económicas, militares y educativas impulsadas por el poder estadounidense en Puerto Rico, las cuales provocaron resistencias por parte de los hacendados, trabajadores y población en general, ante el deterioro de las condiciones de vida. La cuestión nacional cobró un espacio importante en el debate público y surgió con fuerza un movimiento nacionalista reivindicativo, que cuestionó el poderío estadounidense en la isla. Otras expresiones de resistencia se forjaron en el ámbito de la lucha obrera, con la formación de sindicatos, en la gestación de un movimiento cooperativista, la creación de sociedades de ayuda mutua y otras formas de organización ciudadana en las cuales se iban moldeando las resistencias y forjando las estrategias de

lucha. Los movimientos comunitarios que hoy ocupan nuestra atención son en gran medida herederos de aquella lucha social. Estos asuntos, junto a las aspiraciones de una participación en todas las esferas de la vida siguen dominando el debate cultural, social y económico hasta la actualidad.

A todos los niveles, es una señal de los tiempos que la democracia participativa cobre fuerza, reconocimiento y prestigio. En una histórica decisión del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas se aprobó una resolución abriendo el camino para elevar la causa de la descolonización a la Asamblea General. En este marco se hizo también presente la sociedad civil por medio de organizaciones como el Colegio de Abogados, y el liderazgo de la lucha más emblemática en las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, las que dirigirán el país.

¿Quién desafía al Estado y para qué?

Podemos hablar en primera instancia de lo que se ve: dónde están, quiénes son, qué piensan estos nuevos actores sociales que van reconstituyendo y redefiniendo la sociedad civil, y la relación entre sociedad civil y Estado, y el problema del poder en la sociedad. Irrumpen en el escenario socio-político y definen sus cauces de luchas a partir de ámbitos sectoriales de interés.

A partir de finales de los años sesenta, el deterioro económico fue generando transformaciones en la organización social en la isla. Al igual que en otros países de la región, las instituciones políticas tradicionales como los partidos y las uniones obreras no alcanzaron a canalizar el creciente descontento social ni lograr vías de recuperación económica y de democracia social. Aunque ha experimentado una democracia formal durante el siglo XX y lo que va del actual, su sistema político ha estado plagado de prácticas clientelares, numerosos casos de corrupción, pobreza y desigualdad. Se fue convirtiendo en una partidocracia cuestionada por la sociedad de múltiples maneras, incluyendo cambios en los patrones electorales. Cada vez más los votantes eligen candidatos de los tres partidos que en toda la historia electoral se han disputado el poder desde tres ideologías correspondientes a las definiciones de estatus político de la isla: Estado 51, Estado Libre Asociado (ELA) e Independencia. A pesar de que la participación electoral ha sido significativamente alta (las elecciones se consideran un deporte nacional), la misma ha mostrado una tendencia a disminuir y particularmente el electorado joven va reduciendo su participación relativa. Las uniones obreras y los partidos políticos mayormente se han marginado de la esfera del accionar comunitario, en el cual se han ido articulando las respuestas colectivas al deterioro, donde se ha ido construyendo ciudadanía, nuevas formas de representación ciudadana. Los sujetos tradicionales se fueron haciendo ajenos a las experiencias de poder local y así abonaron la conformación de una cultura política jerárquica y autoritaria.

«Desde este período de erosión del pacto social, en el que se observan fisuras en el mismo, identificamos nuevos desafíos al Estado por parte de diversos organismos de la sociedad civil»

Desde este período de erosión del pacto social, en el que se observan fisuras en el mismo, identificamos nuevos desafíos al Estado por parte de diversos organismos de la sociedad civil: los grupos ambientalistas, que libran luchas por el rescate del ecosistema y la protección de los recursos naturales; el nuevo sindicalismo independiente que confronta la afiliación a centrales estadounidenses; el movimiento estudiantil, que adopta como eje de lucha la oposición al servicio militar obligatorio y la denuncia frontal al modelo de universidad neoliberal; el movimiento feminista impulsando la ampliación de los derechos de la mujer en las esferas pública y privada y que se proyecta transversalmente a todas las luchas sociopolíticas; los rescatadores de terrenos, que han confrontado la política estatal de vivienda y la especulación con la tierra y, más recientemente,

los afanes de expropiación para el desalojo de las familias residentes en comunidades pobres; el movimiento para el desarrollo económico comunitario (establecimiento de empresas colectivas); el movimiento de los trabajadores de la cultura, en especial la música, y el movimiento por la paz, con amplias redes a nivel caribeño; el movimiento cooperativista, en cuyo interior se lucha contra el tutelaje estatal; el deporte como espacio de lucha para el reconocimiento de la identidad puertorriqueña a nivel internacional, entre otros. En estas esferas de expresión ciudadana se observa una multiplicidad de prácticas colectivas que a diversos niveles confrontan al Estado colonial. En efecto, son formas de acción colectiva que implican la existencia de conflictos a los que se enfrentan desde una conciencia e interpretación que relaciona ese conflicto con determinaciones políticas ejercidas desde el poder. En nuestra realidad, el tema de los movimientos sociales se inserta en una matriz de cuestionamiento al sistema colonial, pero no se agota su riqueza y complejidad en esta esfera de lucha. Hasta los años ochenta, el liderazgo de la lucha sindical,

ambiental, feminista, entre otros, provenía de las filas del independentismo y de la esfera anticolonial de las luchas sociales, fuertemente reprimidas y desarticuladas por las agencias policíacas estadounidenses. Sus organismos de coordinación, sus formas de representación, se ejercían desde el ideario de la emancipación política y social. Ocurre entonces un amplio proceso de organización popular que asciende marcadamente en las siguientes décadas. Ese periodo corresponde a lo que podríamos llamar “época de constitución de los movimientos sociales”.

De tal forma que la deslegitimación de los partidos políticos abrió el cauce a la expansión de toda una gama de iniciativas ciudadanas que desde los ámbitos rurales y urbanos defienden derechos, claman por servicios, se oponen a medidas gubernamentales, construyen redes que desempeñan un papel clave en la construcción de significados sociales compartidos, y expresan voluntad creciente de intervención en el proceso de cambio social. Se constituyen en espacios de socialización que refundan o producen identidades colectivas y nuevos sujetos colectivos que disputan la hegemonía del Estado.

Si bien resulta evidente el impacto de estos movimientos que inciden en el ámbito social, cultural y político desde una diversidad de demandas, la temática es un tema emergente en las ciencias sociales en Puerto Rico. Los enlaces entre lo social y lo político es la formación de una cultura ciudadana con ejes de estudio que han generado una producción teórica significativa en la región latinoamericana. A medida que la acción colectiva fue ganando terreno en la escena pública, la academia se fue interesando en procesos sociopolíticos que estos movimientos generaban.

En los últimos años, el tema de la democracia política y su defensa se ha convertido en una cuestión central para diversas corrientes de pensamiento latinoamericano.

Estamos de acuerdo con Lechner en que si la problemática de la revolución fue el foco iluminador de las sociedades latinoamericanas en la década del sesenta (digamos desde la Revolución Cubana en 1959 hasta el derrocamiento de Allende en 1973), el leitmotiv del actual período es la democracia. El tema es celebrable por las potencialidades que contiene. La recuperación de los valores democráticos abre la posibilidad de contrarrestar la tradición autoritaria de los partidos y del qué hacer social y político como conjunto y de reformular objetivos y prácticas de las distintas organizaciones. En Puerto Rico, la creciente insatisfacción con los partidos tradicionales ocasionada por su inoperancia para implantar soluciones y por la ausencia de democracia sirve de plataforma para la emergencia de nuevos actores sociales operando en un contexto novedoso por la articulación de luchas locales, sectoriales, nacionales y

globales que combinan un cierto principio de globalidad con la referencia a una identidad particular. En los setenta se produjeron estudios comparativos, en gran medida inspirados en los aportes de Alain Touraine, quien investiga sobre los movimientos sociales en su relación con la democracia y la política especialmente en el marco latinoamericano. También desde la óptica latinoamericana, autores como Manuel Garretón nos ilustran sobre las transformaciones de las nuevas formas de acción y la resignificación de los nuevos ejes de la acción social colectiva y los conflictos sociales (Mirza, 2006). Por otra parte, Boaventura de Sousa Santos nos advierte que pese a la unidad que se proyecta en la oposición de los movimientos sociales al neoliberalismo, se observa entre los estudiosos del tema que existen desencuentros entre teoría y práctica, las teorías sobre la transformación social actualmente disponibles no dan cuenta adecuada de esa actividad política y cultural. Coincidimos con Wallerstein en que los movimientos sociales nos plantean un desafío ético y político. Actualmente, los movimientos están buscando el apropiado equilibrio entre las batallas inmediatas y la lucha para transformar el sistema en algo más moral, más igualitario y más democrático.

Para el análisis de los movimientos sociales en Puerto Rico, y en particular las nuevas formas de liderazgo comunitario, partimos de una corriente teórica que vincula al movimiento social con la matriz democrática, que supera la visión estrecha de la democracia formal con sus prácticas elitistas alejadas de la cotidianidad de la trama social de las mayorías. Exploramos la pregunta central acerca de si es posible reconstituir la ciudadanía a partir de la resignificación de los nuevos ejes de la acción social colectiva. ¿Será que los movimientos sociales están generando una nueva concepción de la democracia y una nueva manera de construir el terreno político? ¿Se desplazan los conflictos al campo de lo cultural? ¿Quiénes son los protagonistas de estos nuevos movimientos sociales y hasta qué punto pueden proyectar sus aspiraciones desde el escenario comunitario hacia una esfera más global de representación?

En todo caso, del acopio informativo que hemos ido abordando se desprende que los movimientos de base comunitaria en Puerto Rico tienen una doble naturaleza: se encuentran fuertemente enraizados en los reclamos de base comunitaria y se proyectan al espacio público nacional e internacional, más recientemente mediante su participación en redes internacionales.

Últimamente un grupo de investigadoras sobre movimientos sociales y comunitarios ha conformado un grupo de estudio para trabajar dimensiones teórico metodológicas que pudieran contribuir a un abordaje integral que permita afrontar la complejidad del tema.

Partimos pues de un enfoque que indaga acerca de cómo los puertorriqueños, por medio de su liderazgo en espacios de organización comunitaria y local, confrontan la fragmentación de la vida social, los problemas de la ingobernabilidad, la corrupción, el incumplimiento con las leyes y reglamentos que puedan proteger sus derechos, la protección de sus derechos sociales, de sus recursos naturales, en fin, cómo vinculan en sus prácticas la esfera de lo social y lo político partiendo de una perspectiva de cambio social profundo, en un afán de reconstruir las condiciones sociales en que se hacen, deshacen y rehacen estos sujetos históricos. Se trata, en efecto, de determinar la especificidad de los antagonismos de los que surgen y los cambios en las formas de la política que su presencia ha generado.

Condiciones sociales en que se construyen los sujetos históricos

Condiciones económicas

En los últimos 40 años, Puerto Rico ha vivido una transición veloz de un modelo de desarrollo de corte agroindustrial a otro basado en la industrialización independiente y la modernización institucional que se expresó en el programa Manos a la Obra. El economista Richard Weiskoff, en su libro *Fábricas y Cupones* caracteriza el nivel económico de Puerto Rico como uno de "bienestar para las transnacionales". Lo resume en "mercancías, capital y transferencias, hacia adentro; productos, ganancias y gente hacia fuera".

Economistas como Francisco Catala y el Brookings Institution y el Centro para la Nueva Economía destacan que el modelo de Puerto Rico basado en transferencias federales ha creado una cultura de dependencia que le inhibe y descarta la exploración e invención institucional de la cual el desarrollo económico debe apoyarse para impulsar alternativas. La inercia ha permeado toda iniciativa para cambiar los modos de hacer las cosas, las normas de articular procesos de producción, tratados comerciales, etc. De un Estado colonizado pero emprendedor, de un capitalismo de Estado de la década del cincuenta cuando Puerto Rico apuesta a traer inversión de EE.UU. y exportar hacia allá, fue pasando a un único horizonte en el plano de su política económica —el modelo de transferencias federales que ha perdido toda vigencia en esta era de la globalización en la que aquel privilegio de acceso al mercado estadounidense ya no es lo que era entonces. Los paquetes de incentivos ya lo ofrecen otros países. Ahora, el capital estadounidense está más interesado en invertir en otros países para explorar nuevos mercados, si bien Puerto Rico tiene un caudal de recursos humanos que exporta a raudales. Por otro lado, la cultura laboral en Puerto Rico, amparada en la lógica de las transferencias federales y los cheques de alimentos, cercena la conciencia y socava las bases para ampliar el espacio económico al interior de su economía nacional y tras-

cender hacia un espacio multidimensional de la autogestión económica, lo que contrasta con la agilidad institucional de otras economías. Nuestra gran limitación es la Carta de Poderes para desarrollar un modelo económico de avanzada, para establecer nuevas redes de interdependencia, aumentar el poder de negociación, reducir la vulnerabilidad, para establecer políticas de migración, de cabotaje, de diplomacia económica para el diseño de contactos comerciales, ignorar o rechazar esta interdependencia, darle la espalda a la dinámica institucional regional y global, postular como ideal la subordinación política a un centro imperial y favorecer la dependencia como eje de la estrategia de descomposición social.

Puerto Rico tiene un ingreso nacional bruto de 50 mil millones de dólares, el cual no creció en 2006; a diferencia de Singapur, el modelo de competencia perfecta es una ficción histórica que significa renunciar al desarrollo y optar por la dependencia.

Este modelo no ha logrado en la actualidad hacer avances significativos en la reducción de los niveles de pobreza que se han mantenido muy altos. De acuerdo con los estándares de medición del censo de Población y Vivienda de los Estados Unidos del año 2000, en Puerto Rico, el 48% de la población vive bajo niveles de pobreza, cifra muy superior a los niveles de pobreza de los Estados Unidos, y que duplica los niveles de los lugares más pobres como Washington (20%), Mississippi (19,9%) y Louisiana (19%). La pobreza en Puerto Rico está ligada a altísimas tasas de desempleo y subempleo que siempre superan el 12% formal. Frente a esta realidad, muchos optan por salir del mercado de trabajo y acogerse a los diversos beneficios que ofrece el gobierno federal a las personas de bajos ingresos. Las altas tasas de desempleo se producen a pesar de que hay una elevada propensión a la emigración a EE.UU., por lo que la población actual de Puerto Rico es de 3.800.000 y ya viven 3.400.000 en EE.UU.

Condiciones políticas

A partir de los años sesenta, se evidencian replanteamientos políticos y nuevas fisuras en la relación Estado-sociedad civil. Con la derrota electoral del Partido Popular Democrático en 1968, después de veinte años de indisputado triunfo electoral, se torna evidente la pérdida de legitimidad del Estado colonial que había asumido un corte populista, y que desde entonces los dos partidos mayoritarios, Partido Nuevo Progresista y Partido Popular Democrático, se han turnado en el poder sin haber logrado, mediante una amplia mayoría, impulsar y sostener un proyecto de sociedad. Este cambio de patrón en la cultura política desemboca en una fragmentación de la acción política y desencadena una explosión de la sociedad civil. Esta división en la sociedad ha estado acompañada de una sostenida crítica a los par-

tidos por su obstaculización de las reformas a las que estos movimientos apuntan. “Los partidos políticos que han compartido el poder público en este país se han convertido en fósiles irrelevantes y en estorbos públicos o históricos” (*El Nuevo Día*, 7 de septiembre de 1990).

Paralelamente a este proceso la gente se organiza adoptando nuevas formas asociativas y un nuevo liderazgo comunitario enraizado en la comunidad.

Mediante el estudio del liderazgo comunitario como sujetos del movimiento por el apoderamiento y la autogestión, pretendemos arrojar luz sobre el papel de estos nuevos sujetos sociales en la redefinición de los espacios de lucha en el contexto socio-político puertorriqueño, donde tradicionalmente se han definido su espacio de lucha en términos de la fórmula de estatus político: Estado Libre Asociado, Estatidad o Independencia. La selección del tema propiamente parte del reconocimiento de las potencialidades de estas nuevas prácticas sociales como portadoras de estilos alternativos de desarrollo y de nuevas maneras de gestión organizativa para responder a una crisis que afecta todos los órdenes de la vida socio-política puertorriqueña y caribeña.

Estado colonial y lucha social

El análisis del tema movimientos sociales en la formación social puertorriqueña exige precisiones conceptuales respecto a la naturaleza del Estado colonial y sus vínculos con el Estado federal norteamericano. Desde 1898 Puerto Rico se desenvuelve dentro de la estera política de los Estados Unidos en una relación donde, jurídicamente, forma parte del territorio de dicho país. Su estrecha vinculación define su campo de interacción como una esfera de análisis insoslayable para la comprensión de las condiciones y alcances de la relación Estado-sociedad civil.

La articulación entre la esfera federal y colonial puntualiza la especificidad del espacio político donde de los antagonismos surgen los movimientos sociales. La compleja red de mediaciones institucionales que elabora el Estado colonial incide sobre todos los campos del quehacer social. Cuando se avizoran conflictos que pudiesen culminar en crisis política, la esfera federal de la dominación estatal adquiere preeminencia en la reestructuración del ordenamiento político. Tal ha sido el caso en la crisis del treinta, con las medidas asistencialistas, y recientemente en el primer lustro de los setenta, cuando la magnitud de la crisis económica amenazaba las bases de la dominación, que el Estado federal recurrió a solventar la disminución inaudita en todos los renglones de la actividad económica mediante una inyección masiva de fondos federales, haciendo extensivo a Puerto Rico los programas federales de asistencia nutricional.

Democracia política

La democracia es participación decisiva de las mayorías en los asuntos políticos, tanto en la sociedad como en los partidos, pero también en cuanto al acceso garantizado, para todos, a los satisfactores materiales y los bienes de la educación y la cultura, es decir, en el sentido de libertad ligada a igualdad. Las reformas democráticas han sido históricamente el resultado de largos años de esfuerzos y enfrentamientos contra los dueños del poder.

En Puerto Rico la creciente insatisfacción con los partidos tradicionales ocasionada por su inoperancia para implantar soluciones y por la ausencia de democracia y pluralismo en su interior ha impulsado una gran diversidad de esfuerzos organizativos a nivel local, regional, sectorial y nacional, trascendiendo líneas partidistas. Sus propuestas de democracia participativa puntualizan la necesidad de elevar la participación de todos los componentes de la sociedad en los procesos decisionales.

Es de reconocimiento generalizado que los procesos de legislación y formulación de políticas públicas en Puerto Rico se encuentran sumamente centralizados y definidos principalmente por consideraciones burocráticas e intereses partidistas estrechos. Las propuestas van dirigidas a promover la descentralización de los poderes gubernamentales mediante mecanismos que permitan la participación ciudadana en todos los asuntos decisionales de política pública que la afecta, por ejemplo, mediante la mayor autonomía para los municipios, juntas escolares, ciudadanas, etc. Asimismo, postulan la necesidad de promover la participación democrática en todos los niveles de la sociedad civil (asociaciones de comerciantes y de agricultores, organizaciones profesionales, culturales y deportivas, juntas vecinales, organizaciones políticas, cooperativas, sindicatos, etc.). Otros mecanismos como legislación directa por petición, iniciativa ciudadana, revisión de mandato, residenciamiento, voto por candidatura o voto directo, entre otros, han sido promovidos como expresión de afanes de democratización de nuestros procesos decisionales.

Democracia económica. Movimientos para la autogestión económica

La característica fundamental de la economía de Puerto Rico es su dependencia y, en consecuencia, su fragilidad ante los vaivenes de la economía estadounidense y mundial. El modelo económico actual se caracteriza por su orientación para el bienestar de las corporaciones transnacionales a expensas del debilitamiento de las nativas. Se resume en movimiento de mercancías, capital y transferencias hacia adentro, productos, ganancias y gente hacia afuera. Gran parte de la actividad económica está bajo el control de intereses extranjeros engranados a una economía mundial inestable, contraria a los intereses de las grandes mayorías.

«Una de las importantes limitaciones del modelo, que ha provocado la mayor organización ciudadana, es la carencia de una perspectiva ecológica»

Una de las importantes limitaciones del modelo, que ha provocado la mayor organización ciudadana, es la carencia de una perspectiva ecológica. Desde principios de los años setenta se ha intensificado la confrontación con la degradación y el deterioro del ambiente provocado por el modelo puertorriqueño de desarrollo económico. A muy diversos niveles de la sociedad civil se ha desarrollado una labor de defensa de los recursos naturales renovables y no renovables

del país. Igualmente, se han desarrollado múltiples luchas comunitarias que han comenzado a conformar un movimiento ecológico popular y autónomo. Especialmente, a partir de los años setenta se ha visto un mayor compromiso con el impacto de la política de desarrollo económico en Puerto Rico y el per-

juicio ambiental, destrucción de los recursos naturales y daño a la salud creado en nombre de un progreso que ha estado desequilibrado y ajeno a proyecciones y estructuras autónomas.

Estas iniciativas de corte ambientalista confluyen en una corriente de pensamiento que recoge una práctica social de dimensión más global, tendiente a la ampliación de la base democrática de nuestra sociedad en el plano económico. Es producto de una amplia gama de experiencias organizativas y formas asociativas que en distintos contextos nacionales han demostrado su viabilidad y han servido de instrumento para impulsar la democracia económica. Representa, además, en Puerto Rico, un esfuerzo genuino por atacar el problema estructural del desempleo, abriendo el cauce para la gestación de empresas asociativas y el fortalecimiento de otras figuras legales ya existentes, como cooperativas, corporaciones sin fines de lucro, organizaciones sindicales y otras que componen el llamado sector social de la economía.

La búsqueda de la equidad como valor social está arraigada en la historia de nuestro país. Esto se evidencia en la tradición de formas asociativas, como

son las cooperativas creadas en el siglo XIX en los sectores de producción (como la de los artesanos creada en 1889), de mercadeo agrícola, de albañiles, carpinteros, panaderos, zapateros, sastres y otros, y las sociedades de socorro mutuo; y, en este siglo, las formas asociativas creadas bajo la Ley de Reforma Agraria (esfuerzo propio y apoyo mutuo) y el auge de las cooperativas de ahorro y crédito, consumo y servicios fundamentalmente, las empresas y proyectos comunitarios, principalmente incorporados como corporaciones sin fines de lucro. En cada etapa histórica su composición social y características varían. La historia social del Puerto Rico de los cuarenta da muestras de una amplia base y fuerza social autora de prácticas de autogestión comunitaria. La experiencia organizativa de los trabajadores del campo fue transformándose ante la virtual disolución de la actividad agrícola como fuente de ingreso y de reproducción del campesino como sujeto social, y la ascendencia de un gobierno de corte populista que absorbió las demandas inmediatas de los sectores populares. El impulso del modelo de desarrollo con hegemonía del capital monopólico bajo el programa Manos a la Obra es el marco económico del debilitamiento progresivo de aquel movimiento social. Recientemente, los proyectos comunitarios van adoptando nuevas formas de lucha económica como respuesta a la crisis, y a una tendencia mundial hacia la redefinición de las relaciones entre la sociedad y el Estado, implicando nuevas relaciones entre el sector público y el aparato productivo.

Las nuevas propuestas en el ámbito de la democratización económica pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

- Impulso a la formación de capital puertorriqueño, dando estímulo y apoyo al capital de tipo colectivo como las cooperativas, las empresas comunitarias y otras de interés social.
- Fomento a la creación de empresas democráticas donde los trabajadores sean propietarios.
- Promoción del desarrollo rural integrado de la agricultura para que los aumentos en la producción logren abastecer la demanda interna y nuestra producción agrícola logre proyectarse al exterior.
- Fomento de las actividades económicas no contaminantes que sean compatibles con nuestra condición geográfica.
- Coordinación de esfuerzos para la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, procesos industriales, productos y servicios que puedan ser producidos en Puerto Rico y exportados a otros países del Caribe.

- Conservación energética mediante la promoción de la utilización de la energía solar y otros medios de producción de energía como el reciclaje de desperdicios.
- Apoyo a las pequeñas y medianas empresas de capital puertorriqueño en su lucha contra el capital transnacional.
- Impulso al desarrollo de un marco legal favorable a nuevas iniciativas autogestionarias de producción.

Bibliografía

Mirza, Christian Adel 2006 *Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina. La construcción de nuevas democracias* (Buenos Aires: CLACSO). En <<http://bibliotecavirtual.clacso.org>>.

Nota

1 Ver el tema de la diversidad de apoyo y el papel de un organismo de sociedad civil como lo están haciendo en todo el mundo, en que la democracia cobra fuerza, reconocimiento y prestigio (El Colegio de Abogados de Puerto Rico, 21 al 27 de junio).